

C.A. de Santiago

Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

Proveyendo el escrito folio 92: estése al mérito de autos.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada previa eliminación de los considerandos décimo al décimo noveno.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

**Primero:** Que, por sentencia definitiva de fecha 28 de noviembre de 2022, dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago en los autos Rol C-20375-2018, caratulados “Gallardo con Conservador de Bienes Raíces de Santiago”, correspondiente a juicio ordinario de indemnización de perjuicios, se desestimó la tacha deducida por la parte demandante respecto del testigo Francisco Javier Barriga Villarino. Asimismo, se resolvió rechazar tanto la demanda principal de responsabilidad extracontractual como la demanda subsidiaria de responsabilidad contractual deducidas por el actor y se resolvió que cada parte debía soportar sus propias costas del juicio.

Contra dicha sentencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue declarado admisible por resolución de 28 de diciembre de 2022, elevándose los antecedentes para conocer del recurso.

**Segundo:** Que el apelante funda su recurso en la solicitud de revocación de la sentencia definitiva en los siguientes puntos: (i) que se acoja la tacha deducida en contra del testigo don Francisco Javier Barriga Villarino, por configurarse la causal del artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil; (ii) que se acoja la demanda principal de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual; (iii) en subsidio, que se acoja la demanda subsidiaria por responsabilidad contractual; y (iv) que se condene en costas al demandado, por haber resultado vencido.

A juicio del recurrente, la sentencia impugnada adolece de una deficiente valoración probatoria, al omitir el examen de documentos acompañados oportunamente y cuya autenticidad no fue controvertida por la parte contraria. Tal omisión infringiría lo dispuesto en el artículo 170 N°4 del Código de Procedimiento Civil, norma que exige que todo fallo



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CUBPXZHGXSX

contenga una exposición razonada de los fundamentos de hecho y de derecho que le sirven de sustento.

Destaca que la prueba documental incorporada en primera instancia—incluyendo inscripciones registrales y certificados emitidos por organismos públicos— permite acreditar de manera clara y consistente la existencia de un título de dominio a favor del actor y su posterior eliminación, sin que existiera una resolución judicial o administrativa que justificara dicha supresión. Refiere que estos antecedentes son esenciales para sustentar la pretensión indemnizatoria conforme a lo previsto en los artículos 686 y 688 del Código Civil.

A lo anterior se suma la prueba documental incorporada en segunda instancia, conforme al artículo 342 N°3 del citado cuerpo legal, y que tampoco fue objetada por la parte demandada. Dicha prueba —que incluye constancias del Conservador, certificados de pago de contribuciones y declaraciones ante el Servicio de Impuestos Internos— corrobora tanto la existencia de la inscripción discutida como la relación jurídica del actor con el inmueble, reforzando la verosimilitud y coherencia del conjunto probatorio.

Asimismo, el apelante refiere que el tribunal omitió considerar la confesión ficta que se configura ante la inasistencia injustificada de los representantes del Conservador de Bienes Raíces a la diligencia de absolución de posiciones, pese a haber sido legalmente citados. Añade que, esta incomparecencia genera, conforme al artículo 1713 del Código Civil, una presunción legal respecto de los hechos contenidos en el pliego, los cuales versan precisamente sobre la existencia, cancelación y consecuencias jurídicas de la inscripción a nombre del actor.

En consecuencia, sostiene que la sentencia incurre tanto en errores de hecho como de derecho, al ignorar antecedentes decisivos que acreditan una actuación irregular por parte del Conservador, con efectos patrimoniales concretos sobre el actor. Al restar valor a elementos probatorios determinantes, el fallo transgrede los principios de valoración racional de la prueba y del debido proceso.

Por todo lo expuesto, el apelante solicita que se acoja el presente recurso, se revoque la sentencia de primera instancia en los términos



señalados, y se dicte una nueva decisión conforme al mérito del proceso y a los antecedentes incorporados en autos.

**Tercero:** Que, para la adecuada resolución del presente litigio, resulta necesario establecer los hechos que se encuentran debidamente acreditados en autos. Así, consta que con fecha 29 de febrero de 1972, mediante escritura pública

otorgada en la Notaria de don Luis Azócar Álvarez, doña Adriana Rosa Toro Pérez adquirió de don Alfonso Escobar Villablanca, el inmueble consistente en el local comercial N°5 que forma parte del Edificio ubicado en la esquina de Avenida Apoquindo y La Castellana, con acceso por calle La Castellana Sur N°40, comuna de Las Condes y de los derechos en proporción al valor de lo adquirido en unión de los otros adquirentes en los bienes comunes; escritura que se inscribió a fojas 9.908, N°12.932 del año 1972 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; hipoteca inscrita a fojas 4.421, N°7.950, del Registro de Hipotecas y Gravámenes del año 1972 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; y prohibición inscrita a fojas 3.224, N°6.397 en el Registro de Prohibiciones e Interdicciones del año 1972 del mismo Conservador.

Con fecha 17 de julio de 2017, mediante escritura pública otorgada en la Notaria de doña Valeria Ronchera Flores, doña Adriana Rosa Toro Pérez vendió el inmueble singularizado en el motivo anterior a don Mario Patricio Salinas Medina; escritura inscrita a fojas 67.237, N°96.426, del año 2017 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; hipoteca inscrita a fojas 46.880, N°50.978, del año 2017 en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del mismo Conservador.

Con fecha 23 de marzo de 2018, mediante escritura pública otorgada en la Notaria de don Ricardo Reveco, doña Adriana Rosa Toro Pérez; don Mario Patricio Salinas Medina y el demandante, resciliaron el contrato de compraventa e hipoteca a que se refiere la escritura de 17 de julio de 2017, y doña Adriana Rosa Toro Pérez vendió, cedió y transfirió al actor el inmueble de autos, constituyéndose hipoteca sobre el mismo.

Que la escritura anterior, fue ingresada al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el 26 de marzo de 2018, a las 08:41, Caratula N°13286706.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CUBPXZHGXSX

Con fecha 26 de marzo de 2018, por resolución en causa C- 8549-2018, caratulada “Inmobiliaria La Castellana S.A./Aravena”, del 22° Juzgado Civil de Santiago, se concedió medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre el inmueble inscrito a fojas 67.237, N°96.426, del Registro de Propiedad del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, inscripción en la que figura don Mario Patricio Salinas Medina como propietario del inmueble de autos.

Que la medida antedicha fue inscrita con fecha 3 de abril de 2018, a fojas 14230 N°22531 correspondiente al Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del año 2018, respecto de la inscripción de dominio del inmueble ya referido, a fojas 24.332, No 34.821, del Registro de Propiedad del año 2018, a nombre de doña Adriana Rosa Toro Pérez. Carátula N°13327959.

**Cuarto:** Que, sobre la base de los antecedentes expuestos, la sentencia de primera instancia resolvió desestimar la tachada deducida por el actor en contra del testigo de la parte demandada, don Francisco Javier Barriga Villarino, estimando que no se configuraba la causal prevista en el artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto al fondo del asunto, el tribunal descartó la existencia de un acto u omisión ilegal atribuible al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, como también negó la existencia de un perjuicio patrimonial directo derivado de dicha actuación.

Finalmente, el fallo sostiene, que la eliminación de la inscripción de dominio a nombre del actor habría obedecido a un error administrativo, sin que existiera prueba suficiente que permitiera atribuir dicha supresión a una actuación ilícita, dolosa o negligente por parte del Conservador. En consecuencia, estimó que no se configuraban los elementos constitutivos de responsabilidad civil, concluyendo que el actor no habría perdido efectivamente el dominio del inmueble, ni sufrido un menoscabo jurídicamente indemnizable.

**Quinto:** Que, en referencia a la tachada deducida por la parte apelante en contra del testigo don Francisco Javier Barriga Villarino, esta Corte comparte lo razonado por el tribunal a quo, en cuanto a que no se ha configurado la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5° del



artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, aun cuando el mencionado testigo es dependiente del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, resulta determinante que en la especie han sido demandados no solo dicho Registro, sino también los titulares de los Registros de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, de los cuales el testigo no depende. Además, del mérito de los antecedentes consta que el objeto del litigio comprende actuaciones relativas a todos estos registros, y no exclusivamente al Registro de Propiedades. En consecuencia, atendida la pluralidad de Registros, a la extensión de la materia debatida, no puede estimarse que el testigo sea subordinado y dependiente respecto de todos ellos, como exige la configuración de la causal alegada. Por todo lo cual, corresponde desestimar el agravio del recurrente en este punto y confirmar lo decidido en primera instancia.

**Sexto:** Que, en cuanto al recurso de apelación interpuesto, corresponde pronunciarse sobre la alegación del recurrente relativa a una supuesta errónea valoración de la prueba rendida en autos, en particular en lo referido a los medios de prueba documental y confesional. Según sostiene, la sentencia de primer grado habría incurrido en una omisión sustancial al no desarrollar un análisis razonado y conforme a derecho respecto de la eficacia probatoria de dichos antecedentes ni de su incidencia en la resolución del conflicto, en contravención a lo dispuesto en el artículo 170 N°4 del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, esta Corte estima que el mérito de los antecedentes allegados al proceso permite tener por suficientemente acreditada la adquisición del dominio del inmueble ubicado en calle La Castellana N°40, comuna de Las Condes, por parte del actor, don Pedro Claudio Gallardo Mandujano, en virtud de la escritura pública de compraventa celebrada con doña Adriana Rosa Toro Pérez con fecha 23 de marzo de 2018. Dicha escritura fue presentada al Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo la carátula N°13286706, lo que dio lugar a la correspondiente inscripción de dominio practicada el 28 de marzo de 2018, a fojas 24.333, número 34.822 del Registro de Propiedad.



Sin embargo, consta que con fecha 4 de abril del mismo año, dicha inscripción fue eliminada unilateralmente por el Conservador de Bienes Raíces, sin que en autos conste resolución judicial ejecutoriada ni acto administrativo fundado que justificara dicha eliminación. Esta actuación infringe el principio de inalterabilidad del registro, consagrado en los artículos 96 y 98 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces.

La existencia de la inscripción original y su posterior eliminación se encuentra acreditada mediante un conjunto de documentos acompañados válidamente tanto en primera como en segunda instancia, cuya autenticidad no ha sido objetada por la parte demandada, y cuya eficacia probatoria se encuentra respaldada por los artículos 342 N°3 y 346 del Código de Procedimiento Civil, que regulan el valor probatorio de los instrumentos públicos no objetados en juicio. Conforme a estas disposiciones, los instrumentos públicos harán plena fe en juicio respecto de los hechos que en ellos constan, mientras no sean impugnados por falsedad o inexactitud dentro del plazo legal.

Entre los antecedentes más relevantes que permiten tener por acreditada tanto la existencia como la posterior eliminación de la inscripción de dominio, destacan: la escritura pública de compraventa otorgada ante el notario don Ricardo Reveco Hormazábal, en la que consta el precio pactado —5.500 unidades de fomento— y el objeto de la venta; los certificados de inscripción emitidos por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, los formularios N°2890 del Servicio de Impuestos Internos, en los cuales el actor figura como adquirente, los certificados de avalúo fiscal y de contribuciones de la Tesorería General de la República, en los que el actor figura como propietario, junto con los respectivos comprobantes de pago de impuestos; capturas de pantalla del sitio web oficial del Conservador, en las que consta la existencia de la inscripción luego eliminada; y, finalmente, un certificado de avalúo fiscal correspondiente al primer semestre del año 2019, donde el actor aún aparece como titular del inmueble.

A lo anterior se suma una circunstancia procesal relevante: los representantes legales del Conservador de Bienes Raíces fueron legalmente citados a la diligencia de absolución de posiciones y no comparecieron al



segundo llamado, motivo por el cual fueron tenidos por confesos. Esta confesión ficta, prevista en el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, debe ser apreciada conforme a lo dispuesto en el artículo 1713 del Código Civil, en tanto recae sobre hechos sustanciales, controvertidos y pertinentes, tales como la existencia de la inscripción de dominio a favor del, su eliminación, y la posterior inscripción del inmueble a nombre de la sociedad Inversiones Santa Catalina S.A. En consecuencia, produce plena prueba en los términos del citado artículo 1713.

La supresión de la inscripción de dominio —hecho que ha quedado acreditado en autos, tanto por los documentos públicos acompañados como por la confesión ficta producida en el proceso— se verifica, además, mediante la constatación objetiva de la ausencia de la correspondiente anotación en el Registro de Propiedad. Esta actuación unilateral, ejecutada sin respaldo en resolución judicial ni en acto administrativo fundado, constituye un proceder arbitrario e ilegal, incompatible con los principios de legalidad e inalterabilidad que rigen la función conservatoria. En efecto, los artículos 96 y 98 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces consagran la sujeción estricta del Conservador a la ley en el ejercicio de sus funciones, estableciendo su responsabilidad por los daños que causare mediante actos u omisiones contrarios a derecho, así como la exigencia de que toda modificación o rectificación de los asientos registrales se practique únicamente conforme a un mandato legal expreso. De ello se deriva que el Conservador no puede alterar, el contenido del Registro sino en los casos y formas previstos por el ordenamiento jurídico. En mérito de lo expuesto, al haber eliminado una inscripción de dominio vigente, sin la existencia de un título legal ni de la correspondiente autorización judicial, el órgano registral incurrió en una actuación manifiestamente ilegal, contraria a los principios que informan su función, lo que ha generado un menoscabo patrimonial cierto, directo y evaluable en perjuicio del actor.

En consecuencia, acreditada la actuación ilegal, esta Corte estima debidamente acreditado el daño emergente, entendido como la pérdida económica real y efectiva sufrida por el actor como consecuencia directa de la conducta ilícita de la parte demandada. Dicho menoscabo patrimonial se circunscribe a la pérdida del valor del bien objeto del contrato de



compraventa frustrado, en cuanto representa un perjuicio concreto derivado de la imposibilidad de perfeccionar la tradición y consolidar el dominio del inmueble, a raíz de una actuación registral manifiestamente antijurídica. Se trata, por tanto, de un daño emergente comprobado, en la medida que afecta de manera directa el patrimonio del actor por la pérdida del objeto mismo de la operación celebrada.

La procedencia de esta clase de pretensiones ha sido reconocida por la Excelentísima Corte Suprema, entre otros, en los autos Rol N°12.738-2019, en los que se abordó una situación análoga relativa a la negativa de inscripción de un título por parte del Conservador de Bienes Raíces. En dicha sentencia, el máximo tribunal subrayó que, tratándose de procedimientos de esta naturaleza, resulta indispensable que las solicitudes presentadas ante el sistema registral sean precisas, coherentes y debidamente fundadas, ya que la omisión de tales exigencias puede obstruir el análisis de fondo y comprometer derechos patrimoniales legítimos. Aunque en ese caso el recurso fue rechazado por deficiencias formales, la Corte asentó un principio esencial: que la actuación de los órganos registrales debe ceñirse a criterios de legalidad y coherencia, y que su inobservancia puede tener efectos materiales relevantes para los particulares. Este razonamiento permite proyectar, que la omisión o negativa injustificada del Conservador, cuando impide el perfeccionamiento de un derecho real válidamente constituido, constituye una fuente directa de responsabilidad por los perjuicios patrimoniales ocasionados.

Por lo anterior, al haberse verificado una omisión ilegítima que ocasionó un menoscabo económico al actor, y no habiéndose valorado adecuadamente los antecedentes probatorios ni aplicado correctamente las normas sobre responsabilidad extracontractual ni los principios registrales fundamentales, esta Corte revocará la sentencia apelada en este extremo, acogiendo la demanda de indemnización por concepto de daño emergente.

**Séptimo:** Que, en cuanto a la cuantificación del daño emergente, esta Corte concluye que el perjuicio patrimonial efectivamente acreditado se limita al valor del bien objeto del contrato de compraventa cuya inscripción fue indebidamente suprimida por la actuación antijurídica del órgano





regstral. De los antecedentes del proceso y, particularmente, de lo expuesto en el recurso de apelación, consta que el actor pactó y pagó un precio ascendente a 5.500 unidades de fomento por el inmueble de marras, suma que representa de manera directa, objetiva y comprobable la magnitud del detrimento patrimonial sufrido. Este monto constituye la totalidad del daño emergente indemnizable en la especie, al tratarse de una pérdida cierta, actual y económicamente evaluable, derivada de la imposibilidad de consolidar el derecho de dominio sobre el bien adquirido. En consecuencia, se ordena su pago en su equivalente en pesos a la fecha en que se efectúe, conforme al valor que registre la unidad de fomento en ese momento, aplicándose los reajustes e intereses que se determinarán en lo resolutive de esta sentencia.

**Octavo:** Que, en lo que respecta al lucro cesante, el actor ha solicitado su indemnización fundada en la imposibilidad de percibir los frutos civiles derivados de la explotación económica del inmueble objeto del litigio, como consecuencia directa e inmediata de la eliminación ilegítima de su inscripción regstral. El lucro cesante, como categoría del daño patrimonial indemnizable, se configura cuando una persona deja de percibir un beneficio económico cierto y fundadamente esperado, debido a un hecho antijurídico imputable a otro, conforme lo dispone el artículo 1556 del Código Civil. Su reconocimiento exige la concurrencia de tres elementos: (i) la existencia de una utilidad probable o expectativa razonable de ganancia; (ii) la relación de causalidad directa entre dicha frustración y el hecho dañoso; y (iii) la posibilidad de cuantificar el perjuicio, aunque sea en forma estimativa, sobre bases objetivas y razonables.

En mérito de lo anterior, y considerando que el contrato de arrendamiento acompañado en autos fue celebrado por un plazo de diez años, con una renta mensual de \$1.000.000, esta Corte estima que el lucro cesante sufrido por el actor debe calcularse sobre la base del período contractual efectivamente pactado, correspondiente a 119 meses. Se ha acreditado que el actor estaba en condiciones de cumplir íntegramente sus obligaciones como arrendador, y que el arrendatario, don Tomás Puig Casanova, no solo suscribió el contrato, sino que no ha sido objeto de observación alguna respecto de su solvencia o intención de cumplimiento.



Tampoco se ha aportado al proceso antecedente alguno que permita razonablemente suponer un término anticipado del contrato de arrendamiento. En consecuencia, se fija el monto del lucro cesante en la suma total de \$119.000.000, correspondiente a las rentas que el actor dejó de percibir durante los 119 meses que habría durado el contrato, privación que resulta directamente vinculada a la supresión ilegítima de la inscripción de dominio. El monto será pagadero en pesos, con los reajustes e intereses que se determinarán en lo resolutivo de esta sentencia.

En similar sentido, la Excelentísima Corte Suprema ha recordado en su jurisprudencia —entre otros, Rol N°75.688-2021, considerando noveno— que si bien la determinación del quantum indemnizatorio corresponde a los jueces del fondo, estos deben exponer las razones que motivan la estimación realizada, debiendo ponderar íntegramente las alegaciones de las partes y la prueba rendida, a fin de cumplir con el deber constitucional de motivar las decisiones judiciales y evitar toda apariencia de arbitrariedad.

En consecuencia, se acoge la demanda también en este extremo, y se fija el monto indemnizable por concepto de lucro cesante en la suma ya indicada, la que devengará los reajustes e intereses que se determinarán en lo resolutivo de esta sentencia.

**Noveno:** Que, a fin de resguardar el valor real de las prestaciones ordenadas en esta sentencia, resulta procedente disponer que las sumas fijadas se reajusten conforme a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, desde que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta el pago efectivo. Asimismo, en atención a lo establecido en el artículo 1551 del Código Civil —que regula las causales de constitución en mora del deudor, estableciendo que este incurre en mora por el solo retardo en el cumplimiento de la obligación cuando ha sido requerido válidamente para ello o cuando ha vencido el plazo estipulado para su ejecución—, corresponde disponer que dichas cantidades devenguen intereses corrientes desde la configuración de la mora y hasta su pago total.

**Décimo:** Que, en mérito de lo razonado y sobre la base del análisis de los antecedentes probatorios incorporados al proceso, esta Corte concluye que se configuran los presupuestos legales de la responsabilidad civil



extracontractual invocada por la parte demandante. En efecto, ha quedado acreditada la existencia de un hecho antijurídico imputable al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, consistente en la eliminación de una inscripción de dominio sin mediar orden judicial, actuación que contraviene el principio de legalidad que rige su función y que ha generado perjuicios efectivos, actuales y económicamente cuantificables para el actor.

En consecuencia, se estima procedente acoger la demanda principal de indemnización de perjuicios, en lo relativo tanto al daño emergente como al lucro cesante, debiendo rechazarse, por ende, la demanda subsidiaria fundada en responsabilidad contractual.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 686, 702, 724, 728, 1698, 1556 y 2314 del Código Civil; 341, 342 N°3, 346, 399 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

1°.- Que **se rechaza** la tacha del testigo deducida por la parte demandante en contra de don Francisco Javier Barriga Villarino.

2°.- Que **se revoca** la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el 26° Juzgado Civil de Santiago en causa Rol C-20375-2018, en cuanto rechazó la demanda principal de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, y en su lugar se declara que se acoge dicha demanda, condenándose al Conservador de Bienes Raíces de Santiago a pagar al actor don Pedro Claudio Gallardo Mandujano las siguientes sumas:

a) La cantidad de 5.500 unidades de fomento, por concepto de daño emergente.

b) La suma de \$119.000.000, por concepto de lucro cesante.

3°.- Las sumas precedentemente indicadas deberán ser pagadas en pesos, calculados al valor que registre la unidad de fomento al día del pago efectivo. Dichas cantidades, se reajustarán conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, a contar de la fecha en que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago íntegro. Las cantidades así reajustadas devengarán, además, el interés corriente para operaciones reajustables, a partir de la constitución en mora del deudor.



4°.- Que, atendido a lo resuelto se omite pronunciamiento respecto de la demanda subsidiaria, deducida por el actor.

5°.- Que no se condena en costas al demandado, por haber tenido motivo plausible para litigar.

**Regístrese y devuélvase la competencia.**

**Redacción de la Abogada Integrante señora Candiani,**  
quien no firma por ausencia.

**Rol N°3.438-2022.**

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Itma. Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y la Abogada Integrante señora Claudia Candiani Vidal.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CUBPXZHGXSX

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maritza Elena Villadangos F., Jenny Book R. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CUBPXZHGXSX